JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N° 6 DE VALENCIA

Procedimiento Ordinario [ORD] - 000345/2021

SENTENCIA nº 147/2022

En la Ciudad de Valencia, a cinco de mayo de dos mil veintidós.-

Visto por mí, JOSE FENELLÓS PUIGSERVER, Magistrado Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo N.º Seis de Valencia, el presente recurso seguido como Procedimiento Ordinario N.º 345 del año dos mil veintiuno, seguidos a instancia de la Letrada Sra. Fernández Jiménez, en nombre y representación de [REDACTED], con D.N.I. [REDACTED], contra la Diputación de Valencia, defendida por la Letrada de sus servicios jurídicos, en impugnación de diligencia de embargo, y en atención a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que en fecha veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, por la Letrada [REDACTED], en nombre y representación de [REDACTED], se interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución desestimatoria del Jefe de Servicio de Gestión Tributaria de la Diputación de Valencia, de fecha 22 de abril de dos mil veintiuno, del recurso de reposición interpuesto por [REDACTED] contra la diligencia de embargo de bienes inmuebles dictada en el expediente ejecutivo número 2013/2154/EJE para el cobro de distintos recibos.

SEGUNDO.- Por Decreto de fecha veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno se admitió a trámite el recurso contencioso administrativo, acordándose su tramitación por los cauces del procedimiento ordinario, así como la reclamación del expediente administrativo, y tras formalizarse demanda en fecha dos de diciembre de dos mil veintiuno, en la que, por los hechos y fundamentos que se señalaban, se interesaba se dictara sentencia por la que estimando el recurso contencioso-administrativo, se declarase la nulidad de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, levantando el embargo con respecto a la vivienda habitual de la recurrente, y subsidiariamente se acordara alterar la orden de embargo, con condena en costas a la parte demandada.

TERCERO.- Por resolución de fecha catorce de diciembre de dos mil veintiuno se tuvo por presentada demanda y se dio traslado a la contraparte para que presentara escrito de contestación a la misma, y en fecha catorce de enero de dos mil veintiuno, por la Letrada de la

Diputación Provincial de Valencia, se presentó escrito de contestación a la misma interesando su íntegra desestimación.

CUARTO.- Recibido el pleito a prueba, y tras la admisión de la documental, se formularon escritos de conclusiones, tras lo cual quedaron los autos conclusos para sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se interpone recurso contra una diligencia de embargo dictada en procedimiento de recaudación en relación a diversas tasas, liquidaciones de tributos locales y sanciones de derecho público dictadas por la Diputación Provincial de Valencia por delegación del Ayuntamiento de Bétera.

Pues bien, como dispone el artículo 170 de la Ley General Tributaria, por remisión del artículo 12 de la Ley de Haciendas Locales, *“contra la diligencia de embargo sólo serán admisibles los siguientes motivos de oposición: a) Extinción de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago; b) Falta de notificación de la providencia de apremio; c) Incumplimiento de las normas reguladoras del embargo contenidas en esta ley; d) Suspensión del procedimiento de recaudación.”*

Así, tal y como consta literalmente en dicho precepto legal, los motivos de oposición admisibles contra las diligencias de embargo son exclusivamente los establecidos por dicho artículo 170.3 de la moderna Ley General Tributaria, de manera que cualquier otro motivo de impugnación de aquellas no es admisible, por disposición legal. En cuanto a la posibilidad de impugnar la diligencia de embargo la jurisprudencia viene manteniendo que la diligencia de embargo ni es confirmación ni reproducción del acto declarativo anterior ni de la providencia de apremio que determina el comienzo de la fase ejecutiva del procedimiento, sino una consecuencia ulterior de los mismos, susceptible de recurso basado en determinadas causas rigurosamente tasadas por la ley. Por tanto únicamente cabe invocar la nulidad de los actos posteriores que integran el procedimiento de ejecución mediante la alegación de vicios intrínsecos a los actos efectivamente combatidos, no de los precedentes, es decir con la impugnación de la diligencia de embargo no puede reabrirse el debate jurídico de actuaciones previas que han adquirido firmeza, con la excepción de los cuatro motivos de impugnación aquí recurridos, ni siquiera la presunta improcedencia de la vía de apremio, ya que dicha discusión debería haberse sostenido y reiterado al recurrir la notificación de la vía de apremio, que no es controvertido que se produjo y se recurrió en reposición, pero sin ampliarse a la resolución desestimatoria expresa de dicho recurso el presente procedimiento, o sin recurrir el mismo de forma independiente solicitando después, o no, la acumulación de dicho recurso y del presente.

En definitiva, conforme manda la ley, y en cuanto a la prescripción alegada, fundamentándose la misma en una presunta incompetencia manifiesta del órgano recaudador al notificar las liquidaciones impugnadas y las Providencias de apremio, debemos señalar que el recurrente debería haber procedido a impugnar las mismas, motivo por el cual no procedería, ni en el caso de estimarse el presente recurso, entrar a conocer sobre la impugnación realizada en concepto de sanción urbanística, la cual podrá combatirse, únicamente, en caso de anulación, primero, de la diligencia de embargo, y, segundo, de la Providencia de apremio en ulterior procedimiento. No obstante lo cual, procede señalar, asimismo, que no existe la nulidad pretendida, y ello por cuanto, examinado el expediente administrativo, en la estipulación primera del Convenio de colaboración entre ambas administraciones de fecha 13 de enero de dos mil dieciséis expresamente se declara que dicha delegación de competencias de recaudación comprende todos los ingresos de derecho público titularidad del Ayuntamiento de Bétera, entre los cuales se encuentran las sanciones urbanísticas y las tasas por residuos y por guardería que se consideran por la recurrente como prescritas, sin que la clarificación posterior constituya una ampliación de las mismas ni vulnere dicho convenio norma tributaria o administrativa en su redacción.

SEGUNDO.- Y, por lo que se refiere a la impugnación que se realiza al no ajustarse la diligencia de embargo a las normas reguladoras de éste, por entender que preferentemente se debía atender al orden de prelación de bienes interesada por la recurrente, hemos de manifestar que no consta acreditado cuando se dictó dicha diligencia de embargo que existiera bien inscrito en el Registro de la Propiedad y como tal que afecte a terceros, artículo 13 de la Ley Hipotecaria, susceptible de cubrir el importe de las responsabilidades reclamadas, no siendo discutido que no había accedido al misma la alegada compraventa de otro inmueble, siendo por ello que la mera presentación de la escritura de compraventa a quien aparecía como titulares registrales no constituye prueba fehaciente de su propiedad y estado, con certificación de cargas, al poder existir otro título posterior o preferente de un tercero, siendo irrelevante, dado el carácter revisor de esta jurisdicción, si con posterioridad a dictarse la resolución impugnada sí que se ha procedido a la inscripción de la compraventa. Dicha titularidad no inscrita en el Registro no es susceptible de ser realizada con la misma eficacia y celeridad que el bien inmueble debidamente inscrito, que es indiferente que constituya la vivienda habitual de la recurrente al no ser inembargable y no existir otro bien que garantice el cobro de dicha deuda con similar eficacia, repetimos, por lo que no se vulnera el artículo 169.4 alegado.

Por ello, habiéndose respetado la normativa legal en cuanto las normas reguladoras del embargo, y no siendo admisible la discusión sobre la corrección jurídica de dicho inicio de la vía ejecutiva o de los ingresos de derecho público y liquidaciones tributarias de que traen causa, al amparo del artículo 170.2 de la Ley General Tributaria, en las

que por otro lado no ha quedado demostrado que concurra nulidad que derive en la prescripción de las mismas, procede desestimar el recurso interpuesto.

TERCERO.- Conforme al artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, *“en primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho... La imposición de las costas podrá ser a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima.”*

En el caso que nos ocupa, procede la imposición de costas a la demandante, no concurriendo serias dudas fácticas o jurídicas, si bien en aplicación de este último inciso en relación con los criterios orientativos sobre honorarios profesionales, publicados por el Colegio en fecha diecisiete de diciembre de dos mil catorce para procedimiento ordinario en recurso contencioso administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, se limitan en un máximo de mil ochocientos euros.

Vistos los preceptos citados y demás de aplicación.

FALLO

Que **DESESTIMO ÍNTEGRAMENTE** el recurso contencioso-administrativo seguido a instancia de la Letrada [REDACTED], en nombre y representación de [REDACTED], siendo demandada la Diputación de Valencia, defendida por la Letrada de sus servicios jurídicos, en impugnación de la resolución desestimatoria del Jefe de Servicio de Gestión Tributaria de la Diputación de Valencia, de fecha 22 de abril de dos mil veintiuno del recurso de reposición interpuesto contra la diligencia de embargo de bienes inmuebles dictada en el expediente ejecutivo número 2013/2154/EJE, que se declara ajustada a derecho, y **CONDENO** a la demandante al abono de las costas procesales causadas, con un límite de mil ochocientos euros.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme y contra ella cabe interponer recurso de apelación en el plazo de QUINCE días en este Juzgado, para su conocimiento por la Sala de Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana

Así por ésta mi Sentencia, la pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN,- Leída y publicada la presente Sentencia en audiencia pública, por el Magistrado-Juez que la dicta, de lo que yo, la Letrada de la Administración de Justicia, doy fe.